



Señores

JUZGADO 64 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

E. S. D.

REF:	ACCION DE TUTELA
RADICADO:	11001333406420200007600
ACCIONANTE:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
ACCIONADO:	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y OTROS
ASUNTO:	<u>CONTESTACION ACCION DE TUTELA</u>

RAFAEL EDUARDO BERNAL VILARÓ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.086.070 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 134.997 del C.S.J., actuando en mi calidad de abogado adscrito a la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, y encontrándome dentro del término dispuesto en el Auto Admisorio de la Acción de Tutela, hago presencia dentro de la actuación procesal para **CONTESTAR LA TUTELA**, y en general, para ejercitar el derecho de oposición y defensa que le asiste a la PGN.

1. PRETENSIONES DEL ACCIONANTE.

Indica el accionante vulneración al derecho al debido proceso ya que la Procuraduría General de la Nación omitió sus deberes sobre las actividades realizadas por el Municipio de Guachené al cobrar recursos derivados del cobro del impuesto de industria y comercio de los que el Banco Agrario es deudor solidario.

2. ARGUMENTOS DE DEFENSA DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTO FRENTE A LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL QUE NOS OCUPA.

Actuaciones de la Procuraduría General de la Nación

Informa la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial al respecto lo siguiente:

Los apoderados del Grupo FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S., y BANCOLOMBIA S.A. instauraron quejas disciplinarias en contra del Alcalde del Municipio de Guachené, Cauca, el señor OLIVER CARABALI BANGUERO, y la tesorera municipal, MAR YURY BANGUERO CHARÁ por presuntas irregularidades en el proceso de cobro coactivo adelantado por la administración contra las empresas referidas, al emitir liquidaciones de aforo y acumulación de sanciones e intereses correspondientes, por la falta de presentación y el no pago en las retenciones del impuesto de industria y comercio, atinentes a las vigencias comprendidas entre el 1o de enero de 2012 y el 31 de enero de 2017.

Las quejas presentadas se fundamentan en que los funcionarios al parecer, desconocieron el marco jurídico que regula el proceso de jurisdicción coactiva y emitieron actos administrativos dentro del proceso tributario contra Familia del Pacífico S.A.S., pese a haberse interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento contra los títulos ejecutivos en que se basa el cobro por medio de acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de la Resolución No. 025 de 2017 y la 036 de 15 de diciembre de la misma anualidad, que confirmó de manera parcial la primera, todo ello al punto decretar medida preventiva de embargo por cuantía de cuarenta y dos mil millones de pesos (\$42.000.000.000) en los términos del artículo 837 del Estatuto Tributario.

El grupo FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S. presentó excepciones al mandamiento de pago, entre ellas la del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario: “la interposición



de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”

Con fundamento en la queja inicial y la documentación anexa, aportada por el quejoso, la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, dispuso la apertura de investigación disciplinaria en auto del 14 de diciembre de 2018, contra MAR YURY BANGUERO CHARÁ, Tesorera Municipal de Guachené, por las presuntas irregularidades que se señalaron en la queja.

Mediante Resolución No. 584 del 17 de junio de 2019, el Procurador General de la Nación resolvió “reasignar la competencia dentro del radicado” IUS E-2018-516181 / IUC D-2018-1195843 a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, y con Resolución No. 606 del 25 de junio de 2019 adicionó la precitada decisión y delegó en él la facultad de tomar las medidas preventivas contempladas en el artículo 160 de la Ley 734 de 2002.

Con auto del 25 de junio de 2019, proferido dentro de la queja No. IUS E-2019-179996, se dispuso acumular a este proceso, tanto la referida queja como otros documentos o memoriales, todos atinentes a los mismos hechos por los cuales se adelanta investigación disciplinaria, con la circunstancia adicional de que en esas foliaturas, además de la señora MAR YURY BANGUERO, se señala también como posibles autores de faltas disciplinarias al Alcalde municipal de Guachené, señor OLIVER CARABALÍ BANGUERO y al abogado JORGE SANTOS ACOSTA, quien suscribió contrato de prestación de servicios No. 008 de 2016, con el municipio de Guachené, para el cobro y recaudo de impuestos de industria y comercio, y predial entre otros.

Por medio del auto de fecha 28 de junio de 2019, se adicionó el auto de Apertura de Investigación Disciplinaria para vincular al alcalde municipal, compulsar copias ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca para investigar al doctor Jorge Santos Acosta y solicitar la suspensión de los actos administrativos en aplicación del artículo 160 de la Ley 734 de 2002, medida que no fue de recibo por la administración municipal de Guachené, la cual continuó con el trámite del proceso coactivo.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial ofició en dos oportunidades al Banco Agrario, entre otras cosas, dando respuesta a las solicitudes de esa entidad, para aclararle que la Procuraduría no tiene facultades para suspender actos administrativos sino para “solicitar” la suspensión de los mismos y que en su calidad de gestor fiscal, era responsabilidad del banco, decidir sobre la solicitud del municipio de Guachené respecto del giro de los dineros embargados a Familia del Pacífico.

Igualmente, se les hizo saber que el fondo de la litis debía resolverse en la jurisdicción contencioso administrativa, atendiendo las demandas cursantes en el Tribunal Administrativo del Cauca, interpuestas por los apoderados de las entidades afectadas con las decisiones de la Alcaldía de Guachené.

Esto claramente implica que la Procuraduría mal haría en llegar primero a decisiones de fondo que eventualmente pudieran ser contrarias a las tomadas por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello, se ha desarrollado el proceso, teniendo en cuenta el curso de las acciones en el Tribunal Administrativo del Cauca.

En tal virtud, habiendo tenido conocimiento de la existencia de la decisión que suspendió los actos administrativos de la Alcaldía de Guachené, y de la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del proceso de cobro coactivo, se ordenó oficiar al referido Tribunal para que allegara a esta Delegada, copia auténtica de esas providencias, justamente con el fin de analizar nuevamente el expediente con miras a la toma de decisiones de fondo. El envío de la solicitud se encuentra en trámite que se



suspendió por la situación de emergencia surgida en torno al tema de sanidad pública por coronavirus, ampliamente conocido.

Cabe anotar que la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, fue apelada y ello coloca nuevamente en suspenso la resolución del conflicto presentado, cuyo fondo puntual atañe al tema tributario y administrativo.

Improcedencia de la acción constitucional por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad – existencia de otro medio de defensa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario para el amparo de los derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, el cual procede siempre y cuando el interesado no cuente con otro mecanismo de defensa judicial, salvo que se utilice para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

La acción de amparo constitucional, no fue prevista para reemplazar los procesos ordinarios o especiales y tampoco constituye una instancia adicional a las existentes, pues el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales. Así, debe indicarse, tal y como lo ha señalado la Sección Segunda del Consejo de Estado, entre otras, en la Sentencia de 22 de agosto de 2013¹, *“el amparo no tiene la vocación de sustituir aquellos mecanismos legales que, por negligencia, descuido o incuria, no han sido ejercidos o promovidos por quien se considera afectado”*.

La Corte Constitucional en Sentencia T-451 de 2010, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, señaló que la procedencia de la acción de amparo constitucional se encuentra condicionada a la previa utilización por el accionante de los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico², pues no se trata de un mecanismo supletorio de los recursos previstos por el legislador para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados.

En ese orden de ideas, no puede concebirse la acción de tutela como un sistema de justicia paralelo al que ha consagrado el ordenamiento jurídico en vigor. El entendimiento y la aplicación del artículo 86 de la Constitución tan solo resultan coherentes y ajustados a los fines que le son propios si se lo armoniza con el sistema. De allí que no sea comprensible como medio judicial capaz de sustituir los procedimientos y las competencias ordinarias o especiales otorgadas por el legislador al juez ordinario.

En el presente asunto, el accionante pretende por vía de tutela cuestionar las decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la Nación en el trámite de un proceso disciplinario, para lo cual existe otro mecanismo de defensa judicial. En efecto, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138³ de la Ley 1437 de 2011, el accionante puede cuestionar la legalidad de

¹ Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicación N° 2013-3556-01, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E).

² Sentencias T-469 de 2000, SU-061 de 2001 y T-108 de 2003, Corte Constitucional.

³ ARTÍCULO 138. *NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO*. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su



la actuación surtida en el trámite disciplinario y las decisiones adoptadas por el referido ente de control.

Aunado a lo anterior, debe indicarse que en el trámite del medido de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte actora tiene la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto controvertido, las veces que lo considere pertinente. Sobre el particular el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, establece que:

(...) ARTÍCULO 233. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.

El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda.

Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil.

El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.

Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado Ponente podrá ser decretada en la misma audiencia.

Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso. (...)

Por último, es del caso anotar que dentro del mismo proceso judicial existen herramientas jurídicas que el Legislador estableció y que se erigen como otros medios de defensa adicionales a los ya expuestos, tales como las consagradas en los artículos 95⁴ y 180 de la Ley 1437 de 2011 y el recurso de apelación ante una eventual decisión desfavorable en primera instancia.

publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

⁴ ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda. Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud. Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso.

PARÁGRAFO. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria.



En un asunto similar al aquí expuesto, en el que se estaba cuestionando la legalidad de un fallo disciplinario, la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la Sentencia de Tutela de 12 de julio de 2012 [rad. N° 2012-00591-01], con ponencia del Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, señaló:

*“(...)Ahora bien, en asuntos en los que se ha acudido a la acción de tutela como mecanismo de defensa ante la posible vulneración de un derecho constitucional en el trámite de un proceso disciplinario, esta Sala ha manifestado que las decisiones adoptadas en dichos procesos son de carácter administrativo, **razón por la cual existen diversos mecanismos de control a los que puede acudir el ciudadano en defensa de sus derechos**; de una parte, los vinculados a un proceso disciplinario cuentan con todas las oportunidades de defensa al interior de este proceso; y, en segundo lugar, con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo de control judicial idóneo en el cual existe la oportunidad para solicitar la suspensión provisional del acto controvertido ante el juez competente, aspecto que debe ser tomado en cuenta por el juez de tutela, en relación con la eficacia del medio ordinario de protección.⁵*

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha establecido, en relación con las decisiones de los órganos de control que (i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la eventual suspensión provisional del acto, son mecanismos idóneos y eficaces para la defensa del ciudadano. (...)”

En ese orden de ideas, bajo el entendido que existen otros mecanismos de defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales de la parte actora, resulta procedente que el Juez de Tutela declare la improcedencia del amparo constitucional invocado.

Falta de acreditación del perjuicio irremediable.

En el presente caso, no se prueba ni se configura la consumación de un perjuicio irremediable atribuible a éste organismo que deba ser remediado a través de la presente acción constitucional, la cual de hecho es excepcional. Incluso, tampoco se podría señalar que se pretende evitar un daño porque la actora hace un extenso relato que no da cuenta de las razones por las cuales mi representada le ha vulnerado sus derechos fundamentales.

Importante resulta traer a colación pronunciamiento que hiciera la Honorable Corte Constitucional en sentencia T – 757 de 2005, frente al perjuicio irremediable:

“Decisiones anteriores de la Corte Constitucional han precisado que no toda circunstancia contraria al goce efectivo de derechos o prerrogativas del individuo configura un perjuicio irremediable, sino que, en contrario, sólo algunos hechos cualificados adquieren esa entidad. De esta manera, ‘en primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser

5 Así lo explicó la Corte en sentencia T-832 de 2003: “Como ámbito de la función administrativa, el proceso de responsabilidad fiscal cuenta con dos mecanismos de control. El primero, de índole administrativa y de carácter interno, que se promueve al interior de las instancias de control fiscal. En este caso, se trata de los recursos de reposición y apelación que proceden, en los términos indicados en la ley, contra las decisiones que en él se profieren. El segundo, de índole judicial y carácter externo, que se promueve ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se trata de las acciones a través de las cuales se controvierte la legalidad de la actuación de la administración. No obstante, si bien la acción de tutela procede como mecanismo de protección de los derechos fundamentales vulnerados en el trámite de un proceso de responsabilidad fiscal, lo hace sólo de manera excepcional. Esto es, cuando se está ante actuaciones de la administración que se sustraen a fundamento normativo alguno y que constituyen vías de hecho lesivas de derechos de esa índole”.



grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser imposterables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable’.

De estas características es posible deducir que el requisito de inminencia sólo puede ser comprendido en el marco de la actualidad y materialidad del hecho que se considera contrario a los derechos fundamentales del afectado y que, a su vez, adquiere una entidad tal que sólo puede conjurado a través de medidas urgentes e imposterables destinadas a evitar que se consuma el daño. Por ende, la inminencia del perjuicio no puede tener sustento válido en una mera conjetura hipotética, sino en una circunstancia fáctica de la que se deducen, de forma objetiva, consecuencias graves y ciertas en cuanto al ejercicio de los mencionados derechos⁶”.

A la luz del precedente en cita y conforme a lo que aparece consignado en el escrito de tutela, debo poner de presente al Despacho que no se acredita o demuestra el perjuicio irremediable que se le pudiera causar a la accionante respecto a la Procuraduría General de la Nación por no conceder la acción tutelar, recordemos que no se trata simplemente de efectuar una enunciación, sino que a quien alega un hecho le compete demostrarlo.

3. PETICIÓN

Por las razones anteriores, solicito al Despacho, **NEGAR** la pretensión de amparo propuesta por la accionante contra la Procuraduría General de la Nación.

4. NOTIFICACIONES

Se recibirán notificaciones personales en la OFICINA JURÍDICA de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION, ubicada en la Carrera 5 No. 15-80, piso 10 teléfono (1) 5878750, extensión: 11032 en la ciudad de Bogotá D.C. o en el correo electrónico procesosjudiciales@procuraduria.gov.co y por anotación en el estado de la Secretaría de su Despacho.

5. ANEXOS

- Documentos soporte de las actuaciones de la PGN

Respetuosamente,

RAFAEL EDUARDO BERNAL VILARO
C.C. 80.086.070 de Bogotá
TP. 134.997 del C.S.J.

⁶ Corte Constitucional Sentencia T – 757 de 2005. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.



Dependencia:	Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial
Radicación:	IUS 2018-516181
Implicada:	MAR YURY BANGUERO CHARÁ
Cargo y Entidad:	Tesorera Municipal de Guachené (Cauca)
Quejoso:	ANDRÉS FELIPE GÓMEZ SALAZAR
Fecha queja:	18 de julio de 2018
Fecha Hechos:	28 de agosto de 2017 y siguientes
Asunto:	Auto que adiciona el auto de Apertura de Investigación Disciplinaria para vincular a otro servidor público, compulsar copias para investigación disciplinaria en otra jurisdicción y suspender actos administrativos en aplicación del artículo 160 de la Ley 734 de 2002.

Bogotá, D.C.

I. ASUNTO

Procede el despacho a adicionar el auto de apertura de investigación disciplinaria para vincular a otro servidor público a la presente actuación, compulsar copias para investigar disciplinariamente a un abogado litigante y dispone la suspensión de unos actos administrativos, en aplicación del artículo 160 de la Ley 734 de 2002.

II. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

El apoderado del Grupo **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.**, instauró queja disciplinaria contra la tesorera municipal de Guachené (Cauca), por presuntas irregularidades en el proceso adelantado por el municipio contra la empresa referida, al emitir la liquidación de aforo y acumulación de sanciones e intereses correspondientes, por la no presentación de las liquidaciones y el no pagó en las retenciones del impuesto de industria y comercio, atinentes a las vigencias comprendidas entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de enero de 2017.

Tales circunstancias corresponden a lo decidido en la Resolución 025 de 28 de agosto de 2017; respecto de la cual el quejoso refirió la presencia de yerros jurídicos y fácticos en tanto en su expedición como en su contenido, a la par de posibles falencias en el procedimiento.

Igualmente, adujo en la queja que el municipio prosiguió con el proceso de cobro coactivo, pese a que se les informó que se había iniciado proceso judicial ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por medio de acción de nulidad y restablecimiento de derecho respecto de la Resolución No. 025 de 2017 y la



036 de 15 de diciembre de la misma anualidad, que confirmó de manera parcial la primera.

Con fundamento en la queja inicial y la documentación anexa, aportada por el quejoso, la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, dispuso la apertura de investigación disciplinaria en **auto del 14 de diciembre de 2018**, contra **MAR YURY BANGUERO CHARÁ**, Tesorera Municipal de Guachené, por las presuntas irregularidades que se señalaron en la queja.

Al expediente también fue allegada copia de la documentación correspondiente al proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado bajo el No. 19001-23-33-003-2018-00032-00, instaurado contra el municipio de Guachené.

Seguidamente, mediante auto del 25 de junio de 2019, proferido dentro de la queja No. IUS E-2019-179996, se dispuso acumular a este proceso, tanto la referida queja como otros documentos o memoriales, todos atinentes a los mismos hechos por los cuales se adelanta la presente investigación disciplinaria, con la circunstancia adicional de que en esas foliaturas, además de la señora **MAR YURY BANGUERO**, se señala también como posibles autores de faltas disciplinarias al señor Alcalde municipal de Guachené, señor **OLIVER CARABALÍ BANGUERO** y al abogado **JORGE SANTOS ACOSTA**, quien suscribió contrato de prestación de servicios No. 008 de 2016, con el municipio de Guachené, para el cobro y recaudo de impuestos de industria y comercio, y predial entre otros.

III. COMPETENCIA Y RÉGIMEN JURÍDICO

Aunque la competencia inicial para conocer del presente caso, estaba radicada en la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao (Cauca), el señor Procurador General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, mediante Resolución No. No. 584 del 17 de junio de 2019, designó como funcionario especial para este asunto, al suscrito Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa.

En relación con el régimen aplicable en el presente evento, es evidente que el proceso se tramita bajo lo normado en la Ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único-, en razón a que los hechos aluden a conductas de connotación administrativa en las que al parecer se encuentran comprometidos servidores públicos.

De manera concordante, aplican la Constitución Política, las leyes atinentes a la materia y el Bloque de Constitucionalidad.



IV. CONSIDERACIONES

Los hechos presuntamente irregulares que son materia de investigación, podrían resultar constitutivos de falta disciplinaria, en la que presuntamente estaría involucrada la servidora pública **MAR YURY BANGUERO CHARA**, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Tesorera Municipal de Guachené (Cauca), y ello originó que la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao (Cauca), ordenara la apertura de investigación disciplinaria en su contra.

Pero al analizar la documentación y la queja que fueron acumuladas a este proceso, se concluye fácilmente que los mismos hechos que dieron lugar a el inicio de investigación disciplinaria contra la señora **MAR YURY BANGUERO CHARÁ**, comprometen al señor alcalde del municipio de Guachené, **OLIVER CARABALÍ BANGUERO** y al abogado litigante **JORGE SANTOS ACOSTA**, contratista del mismo municipio.

Entonces, surge la necesidad de **adicionar** el auto del **14 de diciembre de 2018**, proferido por la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, por lo que respecto del señor **OLIVER CARABALÍ BANGUERO**, en su calidad de burgomaestre de la pluricitada localidad caucana (Guachené), se dispone su vinculación a la presente investigación disciplinaria, como quiera que en el expediente existen datos de su identificación y obran elementos de juicio que determinan unos hechos que se le atribuyen y podrían ser constitutivos de falta disciplinaria.

Ciertamente, el vincular a esta investigación al señor **OLIVER CARABALÍ BANGUERO**, se realiza con el propósito de establecer si el comportamiento que se le endilga es constitutivo de falta disciplinaria, verificar la ocurrencia de la conducta, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos, el perjuicio causado a la administración pública con sus presuntas conductas y la posible responsabilidad disciplinaria del investigado, todo a la luz de lo previsto en los artículos 152 y 153 de la Ley 734 de 2002; y en razón a que al parecer incurrió en irregularidades al desconocer deberes y/o prohibiciones previstas en la normatividad disciplinaria, debido a presuntas irregularidades en procedimientos tributarios y administrativos adelantados por la Tesorería Municipal de Guachené (Cauca); sumado a otras presuntas anomalías concernientes a la celebración de contratos.

Para tal fin ya se ha hecho alusión a los hechos determinados objeto de investigación; y de otra parte, se tiene que el señor **OLIVER CARABALÍ BANGUERO** se identifica con cédula de ciudadanía No. **76.042.273** de Puerto Tejada, tal como aparece en la foliatura, por lo que es procedente efectuar su vinculación formal como disciplinado a esta investigación, al cumplirse los



requisitos exigidos en los artículos 152 y 153 de la Ley 734 de 2002. En consecuencia, se ordenarán, practicarán y allegarán las pruebas conducentes, pertinentes y útiles por los medios legalmente establecidos y con observancia de todas las garantías legales y constitucionales.

Sin embargo, en relación con el señor **JORGE SANTOS ACOSTA**, no sucede lo mismo. En efecto, el mencionado abogado litigante suscribió contrato de prestación de servicios No. 008 de 2016 para el cobro y recaudo de impuestos de industria y comercio, así como el predial, entre otros tributos, cuya cuantía se fijó en dos millones de pesos (\$2'000.000.00), pero con cuota litis del **25%**, tal como lo contempla el punto 6° de dicho contrato.

Sobre el particular, encuentra esta Delegada que existe prohibición legal para que los municipios contraten los servicios profesionales de abogados o particulares con el fin de realizar las labores de “cobro y recaudo” de los impuestos adeudados al ente territorial. Ello está expresamente contemplado en la Ley 1386 del 21 de mayo de 2010, que señala:

“Artículo 1°. Prohibición de entregar a terceros la administración de tributos. No se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados. La recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades autorizadas en los términos del Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados.

Las entidades territoriales que a la fecha de expedición de esta ley hayan suscrito algún contrato en estas materias, deberán revisar de manera detallada la suscripción del mismo, de tal forma que si se presenta algún vicio que implique nulidad, se adelanten las acciones legales que correspondan para dar por terminados los contratos, prevaliendo de esta forma el interés general y la vigilancia del orden jurídico. Igualmente deberán poner en conocimiento de las autoridades competentes y a los organismos de control cualquier irregularidad que en la suscripción de los mismos o en su ejecución se hubiese causado y en ningún caso podrá ser renovado.

Las entidades de control correspondientes a la fecha de expedición de esta ley, deberán de oficio revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales.

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República deberán de oficio revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.”



Es entonces fácil inferir que el contrato No. 008 de 2016, antes referido se suscribió con posterioridad a la expedición y entrada en vigencia de la Ley 1386 de 2010, y que al contrariar abiertamente las disposiciones legales sobre la materia, su objeto sería ilícito.

En ese orden de ideas, no podría atribuirse al señor **JORGE SANTOS ACOSTA**, la calidad de particular que cumple funciones públicas, con miras a vincularlo a la presente investigación, porque al ser ilícito el objeto del contrato, no existiría ejercicio de una función pública lícita y en tal virtud no sería sujeto disciplinable por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Por tal razón, se compulsarán copias de toda la actuación, incluido el presente auto, con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Cauca, para que allí se adelante el trámite disciplinario respectivo en contra del doctor **JORGE SANTOS ACOSTA**. Este trámite estará a cargo de la Secretaría de esta Procuraduría Delegada, la cual dejará copia del oficio remisorio en este expediente.

V. OTRAS DECISIONES

Ahora bien, al observar esta Delegada que en el tema objeto de estudio se encuentran cuestionados actos administrativos que en el evento de ejecutarse implicarían posibles perjuicios tanto para las empresas privadas involucradas en el asunto, como para el mismo Estado, por las repercusiones que podrían generarse ante un actuar de la administración municipal, eventualmente vulneratorio del ordenamiento jurídico, se deben hacer las siguientes consideraciones en virtud de lo previsto en el artículo 160 de la Ley 734 de 2002, y con base en ellas se tomarán las medidas pertinentes. Así entonces, con fundamento en:

Que el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia faculta al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes para *“ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, (...) adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”*.

Que el numeral 8 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000 dispone que el Procurador General de la Nación tiene la facultad de: *“distribuir las funciones y competencias atribuidas en la Constitución o la ley a la Procuraduría General de la Nación, entre las distintas dependencias y servidores de la entidad, atendiendo criterio de especialidad, jerarquía y las calidades de las personas investigadas, cada vez que por necesidades del servicio se requiera”*.



Que de igual manera, el numeral 19 del artículo 7 del mencionado Decreto consagra como función del Procurador General de la Nación “*crear comisiones disciplinarias especiales de servidores de la Procuraduría General o designar a un funcionario especial de la misma para adelantar investigaciones disciplinarias y fallar, así como para decretar la suspensión provisional, cuando la gravedad, importancia o trascendencia pública del hecho lo ameriten, para lo cual podrá desplazar al funcionario de conocimiento. (...)*”.

Que el apoderado de la sociedad **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.**, interpuso queja disciplinaria en contra del Alcalde del Municipio de Guachené, Cauca, el señor **OLIVER CARABALI BANGUERO** y la Tesorera de dicho municipio, la señora **MAR YURY BANGUERO CHARÁ**, por presuntas irregularidades cometidas dentro del proceso tributario de cobro coactivo seguido contra la mencionada sociedad.

Que la queja presentada por el apoderado de **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** se fundamenta en que los funcionarios de la Tesorería de Guachené desconocieron el marco jurídico que regula el proceso de jurisdicción coactiva e incurrieron en las conductas de que tratan los artículos 5, 23 y 34 en sus numerales 1º y 6º y 48 en su numeral 1º, de la Ley 734 de 2002, al negarse a dar aplicación a los numerales 3º y 5º del artículo 831 del Estatuto Tributario y con ocasión de ello, suspender el proceso tributario coactivo iniciado contra Familia del Pacífico S.A.S., pese a haberse interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento contra el título ejecutivo en que se basa el cobro.

Que dicha queja fue asignada a la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao bajo el radicado número IUS E-2019-179996.

Que en virtud de la trascendencia de los hechos reseñados y la naturaleza del objeto a analizar, el Procurador General de la Nación concluyó necesaria la reasignación del expediente y la designación de un funcionario especial para que asuma el conocimiento de la actuación disciplinaria indicada, aborde todos los aspectos de la responsabilidad ajenos a su competencia ordinaria y continúe con el trámite de rigor, conforme a lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000.

Que mediante el artículo primero de la Resolución No. 455 del 24 de abril de 2019, el Procurador General de la Nación resolvió “*reasignar la competencia dentro del radicado **IUS E-2019-179996** a la Procuraduría para la Vigilancia Administrativa y Judicial*”.

Que mediante Resolución No. 584 del 17 de junio de 2019, el Procurador General de la Nación resolvió “*reasignar la competencia dentro del radicado **IUS E-2018-516181 / IUC D-2018-1195843** a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, y con Resolución No. 606 del 25 de junio de*



2019 adicionó la precitada decisión y delegó en el suscrito la facultad de tomar las medidas preventivas contempladas en el artículo 160 de la Ley 734 de 2002,

Que por medio de auto del 25 de junio de 2019, esta Delegada resolvió acumular el **IUS E-2019-179996** y otros documentos a la presente investigación disciplinaria, por tratarse de los mismos hechos y tener como disciplinada común a la servidora pública **MAR YURY BANGUERO CHARÁ**,

Que en ejercicio de sus facultades tributarias la Tesorería de Guachené inició proceso de fiscalización contra **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.**, con ocasión del cual profirió Liquidación Oficial de Aforo por cuantía de veintinueve mil setecientos setenta y cuatro millones doscientos noventa y cuatro mil pesos (\$29.774.294.000), mediante la Resolución No. 025 del 28 de agosto 2017.

Que previo recurso de reconsideración interpuesto por **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.**, la Tesorería de Guachené confirmó la decisión mediante Resolución No. 036 del 15 de diciembre de 2017, pero corrigió la cuantía de la liquidación y la estableció en veintiocho mil ochocientos noventa y cinco millones setecientos setenta y tres mil pesos (\$28.895.773.000).

Que el 23 de enero de 2018 **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** interpuso ante el Tribunal Administrativo del Cauca demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 025 y 036 de 2017, la cual fue repartida al Magistrado Carlos Hernando Jaramillo Delgado bajo el radicado No. 19-001-23-33-003-2018-00032-00.

Que mediante Resolución No. 005 del 26 de enero de 2018 la Tesorería de Guachené inició proceso coactivo contra **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** para el cobro del valor establecido en la Liquidación Oficial de Aforo contenida en las resoluciones 025 y 036 de 2017 y en virtud de ello decretó medida preventiva de embargo por cuantía de cuarenta y dos mil millones de pesos (\$42.000.000.000) en los términos del artículo 837 del Estatuto Tributario.

Que el 29 de enero de 2018 la Tesorería de Guachené libró mandamiento de pago contra **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.**, notificado el 14 de febrero de 2018.

Que mediante escrito del 06 de marzo de 2018, **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** presentó excepciones al mandamiento de pago, entre ellas la del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario: *“la interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”*

Que a través de la Resolución No. 007 de 2018, la Tesorería de Guachené declaró no probadas las excepciones propuestas al mandamiento de pago.



Que a través de la Resolución No. 11 del 21 de marzo de 2018, la Tesorería de Guachené revocó el mandamiento de pago del 29 de enero de 2018 y la Resolución No. 007 de 2018 que resolvió las excepciones, por considerar que existió un error de digitación en el número de la Liquidación Oficial de Aforo.

Que el 06 de abril de 2018 la Tesorería de Guachené notificó nuevo mandamiento de pago contra Familia del Pacífico S.A.S. por valor de veintiocho mil ochocientos noventa y cinco millones setecientos setenta y tres mil pesos **(\$28.895.773.000.00)**.

Que mediante escrito radicado el 25 de abril de 2018, **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** presentó excepciones contra el mandamiento de pago notificado el 6 del mismo mes y año, reiterando la excepción del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario, relativa a la interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los títulos ejecutivos, indicando que por tal motivo debía suspenderse el cobro coactivo.

Que a través de la Resolución No. 047 del 27 de abril de 2018 la Tesorería de Guachené resolvió declarar no probadas las excepciones. Al referirse a la excepción del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario, la Tesorería de Guachené indicó: *“fundamenta el recurrente la Excepción B el hecho de haber interpuesto la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo , de acuerdo al numeral 5 del artículo 831 del E.T., y adjunta copia simple del Acta Individual de Reparto del Tribunal Administrativo del Cauca y copia simple de la primera hoja de la referida demanda y a lo largo de su escrito hace referencia al “título ejecutivo” y no relaciona o cita los mencionados actos o resoluciones que fueron demandadas y no especifica contra que título ejecutivo versa la demanda, por lo que la excepción invocada será declarada no probada”*.

Que **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 047 del 27 de abril de 2018, indicando con precisión los actos administrativos que se demandaron en la jurisdicción contenciosa administrativa, pero a través de la Resolución No. 055 del 25 de mayo de 2018, la Tesorería de Guachené negó el recurso y confirmó la decisión. Para ello, hizo referencia a la excepción del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario indicando: *“En cuanto a la interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que hace referencia el numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional y el numeral 5 del artículo 423 del Acuerdo Municipal No. 031 de 2012, que para que pueda operar la aceptación de la excepción presentada y con fundamento a los referidos artículos, el constituyente debe acreditar dicha actuación presentando dentro del término de los 15 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, copia certificada del auto admisorio de la demanda y constancia de admisión de la demanda, firmada por el funcionario competente, que para el caso que nos*



ocupa, es el Secretario del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca y no copia simple del Acta Individual de Reparto del Tribunal Administrativo del Cauca y copia simple de la primera hoja de la demanda como actuó el apoderado de FAMILIA en su escrito de excepciones (...)”

Que del texto de la demanda de nulidad y restablecimiento radicada por Familia del Pacífico S.A.S. se extrae que la acción va dirigida a la nulidad de las resoluciones No. 025 del 28 de agosto de 2017 y 036 del 15 de diciembre de 2017, que contienen la Liquidación de Aforo y su corrección.

Que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** fue admitida mediante Auto del 26 de junio de 2018.

Que con ocasión de la medida de embargo librada contra Familia del Pacífico S.A.S., Bancolombia S.A. puso a disposición de la tesorería de Guachené en su cuenta del Banco Agrario de Colombia, la suma de sesenta y dos millones doscientos veintitrés mil setecientos sesenta y nueve pesos (\$62.223.769.08) retenidos de las cuentas de las que Familia del Pacífico S.A.S. es titular.

Que el 08 de junio de 2018 **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** radicó derecho de petición ante la Tesorería de Guachené en el que solicitó la suspensión del proceso coactivo promovido en su contra y el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas con ocasión del mismo, en virtud de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra el título ejecutivo.

Que el 12 de junio de 2018 la Tesorería dio respuesta al derecho de petición indicando: *“Que las peticiones o pretensiones elevadas en derecho de petición presentado por FAMILIA, fueron resueltas en su totalidad en la Resolución No. 047 del 27 de abril de 2018, y la Resolución No. 055 del 25 de mayo de 2018, por lo que el Despacho no dará las explicaciones y peticiones solicitadas en el mismo y en cuanto al término solicitado de 15 días para constituir la garantía bancaria o póliza de seguros la Tesorería Municipal de Guachené no concede el término solicitado y se ratifica en todas sus partes el oficio de fecha 6 de junio de 2018”*

Que a través de escrito radicado el 12 de julio de 2018, **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** puso en conocimiento de la Tesorería de Guachené la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento interpuesta contra las resoluciones 025 y 036 de 2018 y con ocasión de ello reiteró la solicitud de no aplicar las medidas preventivas decretadas con ocasión del proceso coactivo.

Que la Tesorería de Guachené vinculó en calidad de deudores solidarios, al proceso coactivo promovido contra **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** a (i) Productos Familia S.A., contra quien libró mandamiento de pago por cuantía de treinta y tres mil novecientos veintidós millones novecientos cincuenta mil ciento



cincuenta y cuatro pesos (\$33.922'950.154.00), y a (ii) Bancolombia S.A., contra quien libró mandamiento de pago por cuantía de mil seiscientos treinta y dos millones doscientos veinte mil ochocientos cuarenta y seis pesos (\$1.632'220.846.00).

Que en el Auto de Trámite No. 004 del 22 de octubre de 2018, la Tesorería de Guachené ordenó ejecutar “[...] *el embargo de las cuentas corrientes y otros bienes que se encuentren en las entidades bancarias o financieras a nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A. [...] hasta el límite máximo ordenado de cuarenta y dos mil millones de pesos (\$42.000.000.000)*” argumentando su calidad de deudor solidario.

Que en virtud del embargo ordenado contra **PRODUCTOS FAMILIA S.A., BANCOLOMBIA S.A.** puso a disposición de la tesorería de Guachené en su cuenta del Banco Agrario de Colombia la suma de treinta y seis mil ochocientos cuarenta y tres millones ciento ocho mil novecientos ochenta y tres pesos (\$36.843'108.983.28), retenidos de las cuentas de las que Productos Familia S.A. es titular.

Que mediante Auto de Trámite del 07 de marzo de 2019, la Tesorería de Guachené ordenó a **BANCOLOMBIA S.A.** “(...) *que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación (...) debe trasladar o depositar cuenta de depósito judicial (...) del Banco Agrario de Colombia el valor de: Mil Seiscientos Treinta y Dos Millones Doscientos Vente (sic) Mil Ochocientos Cuarenta y Seis (\$1.632.220.846.00) o constituir póliza o garantía bancaria por el monto anunciado y a favor del Municipio de Guachené, en caso contrario éste Despacho decretará medida cautelar de embargo a los bienes de BANCOLOMBIA S.A.*”

Que el 8 de marzo de 2019 la Tesorería de Guachené libró mandamiento de pago contra **BANCOLOMBIA S.A.** por cuantía de mil seiscientos treinta y dos millones doscientos veinte mil ochocientos cuarenta y seis pesos (\$1.632'220.846.00) en calidad de deudor solidario.

Que mediante escrito radicado el 15 de marzo de 2019, **BANCOLOMBIA S.A.** solicitó a la Tesorería de Guachené suspender el proceso coactivo y en el mismo sentido, el cobro por concepto de solidaridad, en virtud de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Familia del Pacífico S.A.S. contra el título ejecutivo en que se fundamenta el cobro.

Que mediante escrito radicado el 23 de abril de 2019, **BANCOLOMBIA S.A.** presentó excepciones al mandamiento de pago librado en su contra por concepto de solidaridad, y entre ellas incluyó la excepción de “*falta de ejecutoria del título e interposición de demanda de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo*” de acuerdo a los numerales 3º y 5º del artículo 831 del Estatuto Tributario, argumentando, entre otras cosas, la



interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** contra la Liquidación Oficial de Aforo contenida en el Resolución 025 de 2017 y contra la Resolución 036 del mismo año, que la confirma.

Que mediante Resolución 050 del 26 de abril de 2019 la Tesorería de Guachené resolvió *“declarar como no probadas las excepciones propuestas por BANCOLOMBIA S.A. (...)”*.

Que la Tesorería de Guachené declaró no probada la excepción de *“falta de ejecutoria del título e interposición de demanda de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”* interpuesta por Bancolombia S.A., argumentando que *“la recurrente debió observar los parámetros establecidos en el numeral 4 del artículo 829 del E.T., ya que existe varias opciones de defensa no copulativas sino disyuntivas entre sí, conforme la utilización en la redacción del precepto legal, de la conjunción gramatical disyuntiva “o” que está reforzada por la expresión “según el caso”, al haber empleado la primera de las opciones establecidas en dicho numeral (recurso en vía gubernativa), por lo que el Despacho al resolverle la (sic) el recurso de reconsideración interpuesto agotó la vía gubernativa, una vez notificada en debida forma, quedó debidamente ejecutoriado y pasado al cobro coactivo, esto en cuanto al caso del que se refiere BANCOLOMBIA. //Desde esta óptica de aplicación del procedimiento del E.T. en su artículo 829 y lo actuado por Familia del Pacífico S.A.S. en la vía gubernativa, se concluye procesalmente que los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, estaban plenamente ejecutoriados, por lo que en su momento se le declaró impróspera la misma excepción que hoy alega BANCOLOMBIA, siendo que los actos administrativos ejecutoriados se convierten en título ejecutivo para el proceso coactivo, por lo que al resolverle el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de Aforo alcanzó su ejecutoria y en consecuencia se convirtió en título ejecutivo, gozando de fuerza de ejecutoria, como lo prevé el Art. 828 No. 2 del E.T. (...)”*.

Que previo recurso de reposición interpuesto por **BANCOLOMBIA S.A.** contra la Resolución No. 050 de 2019, la Tesorería de Guachené mediante Resolución 058 del 30 de mayo de 2019 confirmó su negativa argumentando: *“La Tesorería Municipal de Guachené ratifica, que la interpretación y aplicación jurídica dada, siendo la correcta y que debe dársele, al numeral 4 del artículo 829 del E.T., con la presentación del recurso en la vía gubernativa y la interposición de demanda, son excluyentes entre si, y no es una invención o capricho de éste Despacho, como lo deja entrever la representante legal de BANCOLOMBIA en su escrito, en igual sentido lo ha interpretado y aplicado la jurisprudencia cuando siempre se ha dicho, que una vez se resuelvan los recursos de ley, el acto queda ejecutoriado; veamos nuevamente la “Ejecutoria de los actos” a los que sirven de fundamento para el cobro coactivo y dispone en su numeral 4 del artículo 829 del E.T. que dice: “Cuando los recursos interpuestos en la vía*



gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.” Siendo tres (3) formas para que se dé la ejecutoria de los actos en tributario, las cuales son excluyentes entre sí, a saber, 1- Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa 2- las acciones de restablecimiento del derecho y 3- de revisión de impuestos, no olvidando la forma gramatical como (sic) ésta redactado el numeral 4 del artículo 829 del E.T. disyuntiva “o” que está reforzada por la expresión “según el caso””

Que el numeral 4 del artículo 829 del Estatuto Tributario establece que los actos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entienden ejecutoriados *“cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso”*.

Que las expresiones “o” y “según el caso” contenidas en el numeral 4º del artículo 829 del Estatuto Tributario no suponen que el administrado deba elegir entre interponer recursos en vía gubernativa o demandar ante la jurisdicción contencioso-administrativa para evitar la ejecutoria del acto respectivo, pues el numeral 2º del artículo 161 del CPACA establece que *“cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios”*.

Que el numeral 3 del artículo 831 del Estatuto Tributario establece que contra el mandamiento de pago procederá la excepción de *“la falta de ejecutoria del título”*.

Que el numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario establece que contra el mandamiento de pago procederá la excepción de *“la interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”*.

Que el párrafo del artículo 837 del Estatuto Tributario dispone que *“cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que ésta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ordenará levantarlas”*

Que en providencia del 26 de octubre de 2009 la Sección Cuarta del Consejo de Estado indicó: *“El análisis en mención no puede ser objeto del proceso de cobro, pues, el artículo 829-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 105 de la Ley 6 de 1992, prohíbe debatir, dentro del procedimiento administrativo de cobro, cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa, por cuanto para cobrar administrativamente una obligación fiscal, el título ejecutivo debe estar en firme. Si existen cuestionamientos en relación con los actos ejecutoriados que constituyen título ejecutivo, el*



interesado debe interponer los recursos administrativos correspondientes y, posteriormente, si es del caso, acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. // En efecto, si, una vez surtida la vía gubernativa, el deudor pretende discutir la legalidad de los actos administrativos ejecutoriados que le impongan la obligación de pagar una determinada suma de dinero a favor del fisco nacional o, lo que es lo mismo, cuestionar la validez misma del título ejecutivo en su contra, debe demandar tales actos en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, si existe proceso administrativo de cobro puede, en el trámite del mismo, proponer contra el mandamiento de pago la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 831 [5] del Estatuto Tributario, pues se encuentra en discusión la legalidad del acto administrativo que sirve de título ejecutivo y es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la que debe decidir si los actos administrativos en firme, por ende, obligatorios (artículo 66 ibídem), deben o no continuar haciendo parte del ordenamiento jurídico.”

Que en sentencia del 20 de agosto del 2009, la Sección Cuarta del Consejo de Estado estableció que “[d]e conformidad con el artículo 829-4 del Estatuto Tributario, la acción de nulidad y restablecimiento del acto administrativo que sirve de fundamento al cobro coactivo impide que ese acto tenga fuerza ejecutoria, la que sólo surge cuando se decida la respectiva demanda que no de prosperidad a la pretensión de anulación de ese acto. De allí que, en armonía con este precepto, el artículo 831, numeral 5, del Estatuto Tributario, consagre como una de las excepciones contra el mandamiento de pago la interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Cuando se demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho los actos administrativos de determinación oficial de un impuesto, y la administración ha iniciado el proceso de cobro de ese tributo con base en tal título ejecutivo, la excepción que se debe proponer es la prevista en el numeral 5 del artículo 831 citado: “interposición de demanda de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo” o la de “falta de ejecutoria del título” (numeral 3 ibídem), pues no debe olvidarse que los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entienden ejecutoriados, “cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso” (artículo 829 Estatuto Tributario), y sólo es posible iniciar el proceso de cobro cuando los actos administrativos tienen carácter ejecutivo y ejecutorio, como se vio anteriormente”.

Que en providencia del 12 de julio de 2018 la Sección Cuarta del Consejo de Estado se refirió a la excepción del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario indicando que su validez no está sujeta a la admisión de la demanda, sino a la sola interposición: “Advierte la Sala, que después de realizar el análisis de los actos demandados y su confrontación con la norma superior, se observa que tanto los oficios como el concepto objeto de la solicitud de la medida



cautelar difieren de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 831 del E.T., dado que, como se señaló, la palabra “interposición” tiene como significado la formalización, presentación o radicación de la demanda; de allí que no es procedente considerar que la excepción de interposición de demandas solo se configura con la admisión de la misma. // Lo anterior, habida cuenta que la interposición de la demanda la realiza el contribuyente y con ella se surte formalmente la iniciación del proceso contencioso administrativo, en los términos previstos en el artículo 179 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo; mientras que la admisión de la demanda es la etapa procesal subsiguiente, que corresponde determinar al funcionario judicial de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, una vez verificados los requisitos legales de la misma. // Adicionalmente, se debe tener presente que si el legislador no determinó que en el numeral 5º del artículo 831 del Estatuto Tributario la excepción procedente contra el mandamiento de pago correspondía a la “Admisión de la demanda”, no corresponde a la Administración Tributaria hacerlo vía doctrina oficial”.

Que en lo pertinente a los efectos de la excepción contenida en el numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario, en providencia del 04 de noviembre de 2015 estableció la Sección Cuarta del Consejo de Estado: “La excepción anotada tiene por finalidad que se suspenda el cobro coactivo hasta que se adopte decisión definitiva en los procesos iniciados ante la jurisdicción para controvertir los actos administrativos de determinación de tributos. En caso de que se acceda a las pretensiones de la demanda, es decir, que se declare la nulidad de los actos acusados en sede judicial, el proceso de cobro coactivo no podrá continuar. En el evento de que se nieguen las pretensiones, el título ejecutivo (actos de liquidación oficial) surte plenos efectos y la administración tributaria podrá continuar con el cobro (...)”.

Que en el mismo sentido señaló el Consejo de Estado en providencia del 12 de mayo de 2010: “El artículo 831 del E.T. señala dentro de las excepciones que se pueden proponer contra el mandamiento de pago, la de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo” excepción cuyo efecto no es otro que el de suspender el proceso de cobro que se esté adelantando, toda vez que la obligación no desaparece por la prosperidad de la excepción”.

Que el artículo 160 de la Ley 734 de 2002 dispone como medida preventiva por parte de la Procuraduría General de la Nación o la Personería con ocasión de diligencias disciplinarias, la de “(...) solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos o contratos o su ejecución para que cesen los efectos y se eviten los perjuicios cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará al patrimonio público (...)”.



Que el artículo 160 de la Ley 734 de 2002 establece que la medida preventiva *“solo podrá ser adoptada por el Procurador General, por quien éste delegue de manera especial, y el Personero”*.

Que mediante el artículo segundo de la Resolución No. 455 del 24 de abril de 2019 el Procurador General de la Nación resolvió *“designar al titular de la Procuraduría Para la Vigilancia Administrativa y Judicial como funcionario especial, dentro de la diligencia con radicado número IUS E-2019-179996, quien actuará en los términos del numeral 19 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000, con el fin que adelante las actuaciones disciplinarias correspondientes, hasta proferir decisión de fondo por las posibles irregularidades en el radicado antes mencionado, con facultades para abordar todos aquellos aspectos de la responsabilidad ajenos a su competencia ordinaria”*.

Que en virtud de la delegación especial contenida en el artículo segundo de la Resolución No. 455 del 24 de abril de 2019 para efectos del radicado IUS E-2019-179996, el titular de la Procuraduría para la Vigilancia Administrativa y Judicial es competente para la aplicación de las medidas preventivas contenidas en el artículo 160 de la Ley 734 de 2002.

Que al referirse a la constitucionalidad del artículo 160 de la Ley 734 de 2002, expresó la Corte Constitucional en la sentencia C-977 de 2002: *“La norma acusada no hace imperativo solicitar la suspensión, sino que faculta al Procurador General, al Personero Distrital de Bogotá para adoptar la medida preventiva. Por la tanto, si bien el artículo regla el ejercicio de esta facultad, éstos habrán de apreciar en cada caso si es necesario elevar la solicitud de suspensión y si se dan los presupuestos para ello establecidos en la disposición acusada. Empero, en ciertas circunstancias donde es palmario que se presenta una grave vulneración del ordenamiento jurídico o una clara defraudación del patrimonio público, la omisión en el ejercicio de esta facultad podría generar consecuencias jurídicas para quienes fueron investidos de dicha atribución, dado que los servidores públicos responden no sólo por violación de la ley sino también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (C.P., art. 6º)”*.

Que en la misma providencia -sentencia C-977 de 2002- expresó la Corte Constitucional: *“Cuando el procurador, su delegado especial para el efecto, o el Personero Distrital de Bogotá, ante la evidencia de circunstancias que le permiten inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará al patrimonio público, solicita la suspensión del procedimiento administrativo, acto o contrato para hacer cesar sus efectos y evitar posibles perjuicios, y el respectivo servidor público no atiende la solicitud, entonces este último asume los riesgos jurídicos que implica permitir que tales procedimientos, actos y contratos sigan surtiendo efectos. Aunque la solicitud de suspensión no tiene efectos vinculantes ya que no es una orden, sí obliga al destinatario de la medida a adoptar una decisión al respecto. Así, éste no puede guardar*



indefinidamente silencio sobre la solicitud; por el contrario, debe responder oportunamente a la petición que le ha sido formulada. La respuesta debe indicar si se procederá o no a adoptar una decisión que haga cesar los efectos y evite el perjuicio. En caso afirmativo, el acto correspondiente del destinatario de la solicitud debe reunir los requisitos que para su expedición establece el ordenamiento jurídico. En caso negativo, el destinatario debe expresar las razones por las cuales no procede la suspensión. Estas razones pueden ser de dos tipos, en términos generales. En primer lugar, el destinatario de la solicitud puede llegar a la conclusión de que no es procedente hacer cesar los efectos del procedimiento administrativo, del acto, del contrato o de su ejecución porque en realidad no se reúnen las condiciones establecidas en la norma acusada o porque existen otros referentes jurídicos o consideraciones de interés público, que así lo exigen o aconsejan en el caso concreto. En segundo lugar, el destinatario de la solicitud de suspensión puede concluir que sí procede hacer cesar los efectos y evitar el perjuicio en el caso concreto pero encontrar que dentro de sus facultades ninguna es idónea para ese fin y, por lo tanto, carece de medios jurídicos para atender positivamente la medida preventiva. // En ambos casos, se trata de una decisión autónoma del destinatario de la solicitud de suspensión que ha de tomar dentro del ámbito de sus competencias y deberes. Será el destinatario el que aprecie las circunstancias del caso, analice el marco normativo pertinente y asuma los riesgos jurídicos de la decisión o las responsabilidades de diverso orden que de ella se puedan derivar cualquiera que sea el sentido de la misma, positivo por atender la solicitud o negativo por no atenderla. Por ejemplo, la decisión del destinatario de la solicitud puede tener consecuencias respecto de la calificación de su diligencia o negligencia”

Que de acuerdo con el artículo 160 de la Ley 734 de 2002 las medidas preventivas son procedentes, entre otros eventos, “cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico”.

Que dentro del proceso tributario coactivo seguido por la Tesorería de Guachené contra **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** y contra **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** y **BANCOLOMBIA S.A.** en calidad de deudores solidarios, se advierte una vulneración al ordenamiento jurídico, particularmente a lo dispuesto por el numeral 4º del artículo 829, los numerales 3º y 5º del artículo 831 y por el párrafo del artículo 837 del Estatuto Tributario, por la negativa de la Tesorería de Guachené a suspender el proceso coactivo promovido contra **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** y los deudores solidarios –**PRODUCTOS FAMILIA S.A.** y **BANCOLOMBIA S.A.**–, a levantar las medidas cautelares decretadas dentro de ese proceso, pese a haber sido informada de la interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el título ejecutivo -Resoluciones 025 y 036 de 2017- y haber sido notificada de su admisión.

Que de los argumentos expuestos por la Tesorería de Guachené en la Resolución No. 047 del 27 de abril de 2018 en la que resolvió sobre las



excepciones al mandamiento de pago propuestas por **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** y en la Resolución No. 055 del 25 de mayo de 2018 en la que resolvió el recurso de reposición interpuesto por **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.**, se extrae una vulneración al ordenamiento jurídico al negar las excepciones bajo el argumento de que la ejecutada *“no relaciona o cita los mencionados actos o resoluciones que fueron demandadas y no especifica contra que título ejecutivo versa la demanda, por lo que la excepción invocada será declarada no probada”*, pese a que en los documentos si se observan identificados con claridad los actos demandados.

Que de los argumentos expuestos por la Tesorería de Guachené en la Resolución 050 del 26 de abril de 2019 en la que resolvieron las excepciones propuestas por **BANCOLOMBIA S.A.** al mandamiento de pago librado en su contra como deudor solidario y en la Resolución 058 del 30 de mayo de 2019 en la que resolvió el recurso de reposición interpuesto por **BANCOLOMBIA S.A.** contra la resolución que resolvió las excepciones, se extrae una vulneración al ordenamiento jurídico por observarse que la negativa a las excepciones se fundamenta en una interpretación incorrecta del artículo 829 del Estatuto Tributario al sostener que *“la presentación del recurso en la vía gubernativa y la interposición de demanda, son excluyentes entre sí”*.

Que las vulneraciones al ordenamiento jurídico ya referidas, pueden constituir violación al derecho fundamental al debido proceso de **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** y de **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** y **BANCOLOMBIA S.A.** en calidad de deudores solidarios.

Que en ese sentido se encuentra procedente la medida preventiva de solicitud de suspensión del procedimiento administrativo respecto al proceso tributario coactivo promovido por la Tesorería de Guachené contra **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** y contra **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** y **BANCOLOMBIA S.A.** en calidad de deudores solidarios.

Que la medida es razonable, en tanto se fundamenta en la incongruencia entre el proceder de la Tesorería de Guachené al negarse a suspender el proceso coactivo y al levantamiento de las medidas cautelares en virtud de la interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el título ejecutivo, y los supuestos normativos del numeral 4º del artículo 829, los numerales 3º y 5º del artículo 831 y el parágrafo del artículo 837 del Estatuto Tributario, según los cuales la interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el título ejecutivo da lugar a la suspensión del proceso coactivo y al levantamiento de las medidas cautelares cuando hayan sido decretadas.

Que la medida es proporcional, toda vez que no afecta gravemente los intereses económicos de la administración municipal de Guachené, pero sí tiene la virtualidad de evitar un daño al ordenamiento jurídico y al derecho al



debido proceso. La medida se limita a la suspensión de los efectos de un proceso tributario coactivo, el cual podrá continuar su curso normal en caso de que no se observen irregularidades disciplinarias que conlleven a la violación al debido proceso de los vinculados al trámite.

Que la medida es idónea porque la suspensión del proceso tributario de obro coactivo es el mecanismo adecuado para lograr el objeto perseguido con su adopción, garantizar el cese de las vulneraciones al debido proceso que eventualmente se estuvieren presentando con ocasión del proceso tributario coactivo seguido contra **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.** y **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** y **BANCOLOMBIA S.A.** en calidad de deudores solidarios.

Que la medida es necesaria porque no existen otros mecanismos igualmente aptos para la realización del fin perseguido.

Que en virtud de los recursos puestos a disposición de la Tesorería de Guachené en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia, con ocasión de los embargos practicados a **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** y **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, es pertinente poner en conocimiento del Banco Agrario de Colombia la aplicación de la medida preventiva para los fines de su competencia.

Finalmente, debe señalarse que para la instrucción y adelantamiento del presente expediente, se designa al funcionario **JOSUÉ MAURICIO TORRES CRUZ**, abogado adscrito a esta Delegada, quien queda comisionado para la práctica de las pruebas a que haya lugar.

En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, en uso de sus facultades legales,

VI. RESUELVE

PRIMERO: ADICIONAR EL AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, en el sentido de **VINCULAR** formalmente a la misma al señor **OLIVER CARABALÍ BANGUERO**, en calidad de **Disciplinado**, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. **76.042.273** de Puerto Tejada, y en su condición de Alcalde Municipal de Guachené (Cauca), para la época de los hechos, conforme a las consideraciones plasmadas en este proveído, y acorde con lo previsto en los artículos 152 y 153 del Código Disciplinario Único.

SEGUNDO: COMPULSAR copias de toda la actuación ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cauca, para que se adelante la investigación disciplinaria contra el doctor **JORGE SANTOS ACOSTA**, conforme a las razones expuestas en el acápite de “Consideraciones” de esta decisión. Por



Secretaría de esta Delegada se realizará el trámite pertinente y se dejará copia del oficio remisorio con recibido para que obre en este proceso.

TERCERO: APLICAR la medida preventiva de solicitud de suspensión del procedimiento administrativo en los términos del artículo 160 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO: SOLICITAR al Alcalde y a la Tesorera Municipal de Guachené la **SUSPENSIÓN** del proceso tributario coactivo promovido contra **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** y sus deudores solidarios –**PRODUCTOS FAMILIA S.A.** y **BANCOLOMBIA S.A.**-, con ocasión de la Liquidación Oficial de Aforo contenida en las resoluciones No. 025 y 036 de 2017.

QUINTO: COMUNICAR a la Tesorería Municipal de Guachené la aplicación de la medida preventiva.

SEXTO: OTORGAR al Alcalde y a la Tesorera Municipal de Guachené un término perentorio de diez (10) días para dar respuesta a la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo.

SÉPTIMO: COMUNICAR al Banco Agrario de Colombia la aplicación de la medida preventiva para los fines de su competencia.

OCTAVO: DESIGNAR y COMISIONAR para la instrucción, adelantamiento y la práctica de las pruebas que sean necesarias, al abogado **JOSUÉ MAURICIO TORRES CRUZ**, servidor adscrito a esta Procuraduría Delegada.

NOVENO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión a los señores **MAR YURY BANGUERO CHARÁ y OLIVER CARABALÍ BANGUERO**. La primera puede ser ubicada en la Calle 4 No. 5 – 40 Barrio Jorge Eliécer Gaitán, Guachené (Cauca), y/o en la Tesorería Municipal de Guachené (Cauca), ubicada en la Calle 4 No. 5 – 46 del mismo municipio. El segundo, se localiza en la Calle 4 No. 5 – 46, Barrio Jorge Eliécer Gaitán, Guachené (Cauca). A los mencionados disciplinados se les advertirá que contra esta decisión no procede recurso alguno.

Igualmente se les señalará que deben aportar las direcciones donde recibirán notificaciones de acuerdo con el numeral 14 del artículo 34 y el artículo 107 de la Ley 734 de 2002, aclarándoles que la omisión de tal deber implicará que las comunicaciones o notificaciones sean efectuadas en la última dirección conocida.

Se les deberá informar que en el evento que lo acepten por escrito, podrán ser notificados a través del correo electrónico que suministren. Para tal efecto, se librarán las respectivas comunicaciones, indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.



DÉCIMO: COMISIONAR a el(la) señor(a) Personero(a) Municipal de Guachené (Cauca), para que de cumplimiento al ordinal inmediatamente anterior (NOVENO), para lo cual se librará el despacho comisorio por Secretaría de esta Delegada. El(la) comisionado(a) levantará las actas de notificación y las deberá enviar a la mayor brevedad posible por medio físico y al correo electrónico: jtorres@procuraduria.gov.co. Se otorgan cinco (5) días libres de distancias.

DÉCIMO PRIMERO: Alléguese los antecedentes disciplinarios de los señores **MAR YURY BANGUERO CHARÁ y OLIVER CARABALÍ BANGUERO**.

DÉCIMO SEGUNDO: Solicítese a la Alcaldía Municipal de Guachené (Cauca), que se sirva remitir a esta Delegada y con destino a este proceso, copia del acta de elección del Alcalde **ÓLIVER CARABALÍ BANGUERO**, así como copia del acta de posesión, constancia de tiempo de servicio en el cargo de Alcalde Municipal, que incluya salarios devengados para los años 2017 y 2018.

DÉCIMO TERCERO: Conformar el cuaderno de copias al tenor del artículo 96 del CDU. La Secretaría de la Delegada adelantará todas las gestiones necesarias para que se surtan los trámites de rigor.

DÉCIMO CUARTO: Contra la presente Resolución no proceden recursos.

DÉCIMO QUINTO: Por Secretaría de esta Delegada, líbrense los oficios y comunicaciones pertinentes, en cumplimiento a lo ordenado en este proveído.

DÉCIMO SEXTO: Registrar en el SIM, la presente decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA

Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial



Dependencia:	Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial
Radicación:	IUS 2018-516181
Implicada:	MAR YURY BANGUERO CHARÁ y OLIVER CARABALI
Cargos:	Tesorera y Alcalde Municipal de Guachené (Cauca)
Quejoso:	ANDRÉS FELIPE GÓMEZ SALAZAR
Fecha queja:	18 de julio de 2018
Fecha Hechos:	28 de agosto de 2017 y siguientes
Asunto:	Auto que ordena compulsar copias ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá

Bogotá, D.C.

I. ASUNTO

Procede el despacho a compulsar copias de carácter disciplinario ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en observancia del memorial fechado del 14 de agosto de 2019, suscrito por el abogado JORGE SANTOS ACOSTA.

II. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

El apoderado del Grupo **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.**, instauró queja disciplinaria contra la Tesorera municipal de Guachené (Cauca), por presuntas irregularidades en el proceso de cobro coactivo adelantado por el municipio contra la empresa referida, al emitir la liquidación de aforo y acumulación de sanciones e intereses correspondientes, por la no presentación de las liquidaciones y el no pago de las retenciones del impuesto de industria y comercio, atinentes a las vigencias comprendidas entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de enero de 2017.

Tales circunstancias corresponden a lo decidido en la Resolución 025 de 28 de agosto de 2017; respecto de la cual el quejoso refirió la presencia de yerros jurídicos y fácticos, tanto en su expedición como en su contenido, a la par de posibles falencias en el procedimiento.

Igualmente, adujo en la queja que el municipio prosiguió con el proceso de cobro coactivo, pese a que se les informó que se había iniciado trámite judicial ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por medio de acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de la Resolución No. **025** de 2017 y la **036** de 15 de diciembre de la misma anualidad, que confirmó de manera parcial la primera, lo que implicó finalmente un embargo por **\$42.000'000.000.00**.



Con fundamento en la queja inicial y la documentación anexa, aportada por el quejoso, la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, dispuso la apertura de investigación disciplinaria en auto del 14 de diciembre de 2018, contra **MAR YURY BANGUERO CHARÁ**, Tesorera Municipal de Guachené, por las presuntas irregularidades que se señalaron en la queja.

Al expediente también fue allegada copia de la documentación correspondiente al proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado bajo el No. 19001-23-33-003-2018-00032-00, instaurado contra el municipio de Guachené.

Seguidamente, mediante auto del 25 de junio de 2019, proferido dentro de la queja No. IUS E-2019-179996, se dispuso acumular a este proceso, tanto la referida queja como otros documentos o memoriales, todos atinentes a los mismos hechos por los cuales se adelanta la presente investigación disciplinaria, con la circunstancia adicional de que en esas foliaturas, además de la señora **MAR YURY BANGUERO**, se señala también como posibles autores de faltas disciplinarias al señor Alcalde municipal de Guachené, señor **OLIVER CARABALÍ BANGUERO** y al abogado **JORGE SANTOS ACOSTA**, quien suscribió contrato de prestación de servicios No. 008 de 2016, con el municipio de Guachené, para la “asesoría” en el cobro y recaudo de impuestos de industria y comercio, y predial entre otros, con cuota litis del 25% sobre los montos recaudados.

Luego, con auto del 28 de junio de 2019, se adicionó la apertura de investigación disciplinaria, ordenando la misma contra **OLIVER CARABALÍ BANGUERO** por presuntas anomalías relacionadas con la expedición de los actos administrativos cuestionados, adicional a otros presuntos hechos; y compulsando copias contra el abogado **JORGE SANTOS ACOSTA**, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cauca, por posible vulneración de la Ley 1386 de 2010.

Cabe anotar que esta Delegada solicitó al Alcalde y a la Tesorera de Guachené suspender la ejecución de los actos administrativos cuestionados, esto es, de la Resolución No. 025 de 2017 y la 036 de 15 de diciembre de la misma anualidad, que confirmó de manera parcial la primera. Lo anterior se hizo en aplicación de lo previsto en el artículo 160 de la Ley 734 de 2002, en aras de permitir un compás de espera mientras la jurisdicción contencioso administrativa resolvía de fondo la controversia suscitada. Sin embargo, tanto el Alcalde como la Tesorera se negaron a suspender tales actos, y en su lugar dieron continuidad al proceso coactivo hasta su terminación, pese a saber que previamente existía una demanda de nulidad y restablecimiento del Derecho en curso, e incluso exigieron al Banco Agrario que girara los dineros embargados a la cuenta del municipio.

Esto último denotó una extraña premura en aquellos funcionarios por lograr que tales emolumentos fueran entregados de manera inmediata al municipio de Guachené.



No obstante, el Banco Agrario de Colombia, acogió los argumentos de la Procuraduría y se abstuvo de entregar los dineros embargados a favor del municipio de Guachené.

Posteriormente, el abogado **JORGE SANTOS ACOSTA** allegó a esta Procuraduría Delegada, memorial suscrito por él, en el cual manifestó no estar de acuerdo con el auto de apertura de investigación disciplinaria, ni con la orden de compulsas de copias disciplinarias en su contra, ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca.

En dicho libelo, el togado endilgó a este servidor la comisión de delitos e incluso utilizó varios términos desobligantes, ofensivos y con tinte agresivo en contra del suscrito Procurador Delegado y del auto proferido, tales como: *“nefasto”, “forma injuriosa y dolosa”, “forma engañosa y malintencionada”, “contribuir o coadyuvar en la evasión de impuestos”, “concluye en forma temeraria”, “puedo intuir que usted no leyó”, “solo necesitaba mostrar gestión”, “coadyuvar a los evasores de impuestos”, “adulterando el mismo”, “forma arbitraria y dolosa”, “arbitrario y temerario”, “está coadyuvando a que los evasores de impuestos...se queden con el patrimonio público”, “su conducta dolosa y mal intencionada”.*

III. CONSIDERACIONES

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, adelanta el presente asunto por hechos presuntamente irregulares que son materia de investigación, y que podrían involucrar a los servidores públicos **ÓLIVER CARABALÍ BANGUERO y MAR YURY BANGUERO CHARA.**

En el mismo auto que adicionó la apertura de investigación disciplinaria inicial, se vinculó al señor alcalde de Guachené, **OLIVER CARABALÍ** y en virtud a los hechos relacionados se consideró pertinente compulsar copias ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, para que se investigara disciplinariamente la conducta del doctor **JORGE SANTOS ACOSTA**, abogado litigante que en virtud al contrato que suscribió con el municipio de Guachené, para prestar “asesoría” en materia de cobro y recaudo de impuestos, tendría cierta relación con los sucesos que son materia de estudio en este proceso.

Al parecer, el doctor **JORGE SANTOS ACOSTA** no estuvo conforme con la adición al auto de apertura de investigación, proferida por esta Procuraduría Delegada, y por ello allegó un memorial en el que expresó sus discrepancias, incluso asumiendo de cierta manera la defensa del burgomaestre vinculado, sin explicación alguna y sin estar reconocido legalmente para ello, pero empleando términos agresivos, injuriosos e inaceptables contra el suscrito Delegado y respecto de la decisión tomada.



Sobre el particular, este servidor considera que para escribir en temas de Derecho y esgrimir argumentos convincentes, no es necesario, desde ningún punto de vista, utilizar impropiedades o afirmaciones ultrajantes, injuriosas o calumniosas contra el funcionario público, contra sus decisiones o contra alguna de las partes o intervinientes en el proceso.

Se puede tener razón o no en los planteamientos jurídicos, pero siempre debe mantenerse el respeto hacia las personas y el decoro profesional que éticamente se exige de todo profesional del Derecho.

En los últimos tiempos se ha tornado casi cotidiano que algunos litigantes acostumbren a atacar al funcionario público con palabras llenas de agresividad y grosería, en lugar de atacar comedidamente con fundamentos de hecho y de Derecho las decisiones de las que discrepan.

Por lo anterior, al observar el memorial lleno de impropiedades y expresiones desobligantes, agresivas, injuriosas y calumniosas que el abogado **JORGE SANTOS ACOSTA** dirigió contra el suscrito servidor público, y atendiendo a que el referido libelo indica a Bogotá como la ciudad de origen o en la que se elaboró y presentó, se dispone compulsar copias de carácter disciplinario ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para que se investigue con todo rigor el proceder del mencionado litigante y se tomen las decisiones a que haya lugar.

Vale decir que en consideración de este Delegado, el doctor **SANTOS ACOSTA**, con su actuar, pudo haber omitido el cumplimiento de uno de los deberes contemplado en el numeral 7° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 ó Código Disciplinario del Abogado; y a la vez podría estar incurso en la falta disciplinaria descrita en el artículo 32 Ibidem, que disponen:

“DEBERES

Artículo 28. *Deberes profesionales del abogado.* Son deberes del abogado:

7. Observar y exigir medida, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión.

Artículo 32. *Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:*

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas.



A lo anterior se suma que el doctor **SANTOS ACOSTA** instauró denuncia penal en contra del suscrito Procurador Delegado, radicada bajo el No. 760016000199201906344, por Prevaricato por acción, prevaricato por omisión, Falsedad ideológica en documento público y Fraude procesal, por haber emitido el auto del 28 de junio de 2019, en el que se vinculó al Alcalde de Guachené a la presente investigación disciplinaria y se compulsaron las copias contra el mismo doctor **SANTOS ACOSTA**, por los motivos ya conocidos. Esa denuncia fue inadmitida por la Fiscalía General de la Nación, al analizar y encontrar que ninguna de las acusaciones hechas por el mencionado litigante, correspondían a la realidad. Ello de plano, desestima y rechaza tajantemente las afirmaciones del togado, en las que endilga la comisión de delitos a este servidor.

En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, en uso de sus facultades legales,

IV. RESUELVE

PRIMERO: COMPULSAR copias de carácter disciplinario ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para que se investigue la conducta del doctor **JORGE SANTOS ACOSTA**, en lo relacionado con la posible vulneración de los artículos 28 y 32 de la Ley 1123 de 2007, y las demás que se llegaren a configurar, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de este proveído.

Anéxese copia de la inadmisión de la denuncia No. 760016000199201906344.

SEGUNDO: Por Secretaría de esta Delegada, dese cumplimiento a lo ordenado en el ordinal anterior y déjense las constancias del caso.

TERCERO: Contra la presente Resolución no proceden recursos.

CUARTO: Registrar en el SIM, la presente decisión.

CÚMPLASE,

GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA

Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial



Dependencia:	Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial
Radicación:	IUS 2018-516181 // D-2018-1195843
Implicada:	MAR YURY BANGUERO CHARÁ y OLIVER CARABALI
Cargos:	Tesorera y Alcalde Municipal de Guachené (Cauca)
Quejoso:	ANDRÉS FELIPE GÓMEZ SALAZAR
Fecha queja:	18 de julio de 2018
Fecha Hechos:	28 de agosto de 2017 y siguientes
Asunto:	Auto que ordena la práctica de pruebas

Bogotá, D.C.

Teniendo en cuenta el contenido del oficio No. 020-0006 del 25 de febrero de 2020, allegado por el Banco Agrario de Colombia, se dispone solicitar al Tribunal Administrativo del Cauca, que se sirva remitir a esta Procuraduría Delegada y con destino al presente asunto, copia autenticada de la decisión que suspendió los actos administrativos acusados, así como de la sentencia de primera instancia, proferidas dentro de los expedientes Nos. 19001233300320180003200 y 1900123330520180024500, instaurados por la sociedad Familia del Pacífico S.A.S, contra el municipio de Guachené.

Por Secretaría de esta Delegada, envíese la petición por el medio más expedito y solicítese respuesta a la mayor brevedad posible.

CÚMPLASE,

LILIANA GARCÍA LIZARAZO
Procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial

*IUS 2018-516181
Proy: JMTC/06/03/2020*



Dependencia:	Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial
Radicación:	IUS 2018-516181
Implicados:	MAR YURY BANGUERO CHARÁ y ÓLIVER CARABALÍ BANGUERO
Cargo y Entidad:	Tesorera Municipal de Guachené (Cauca) y Alcalde Municipal de Guachené (Cauca)
Quejoso:	ANDRÉS FELIPE GÓMEZ SALAZAR
Fecha queja:	18 de julio de 2018
Fecha Hechos:	28 de agosto de 2017 y siguientes
Asunto:	Auto que ordena cumplir fallo de tutela del 29 de noviembre de 2019, emitido por la Sala Civil Famlia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

Bogotá, D.C.

Procede el despacho a ordenar que se dé cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela de segunda instancia, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán (Cauca), calendado del 29 de noviembre de 2019, para lo cual se libraré oficio dirigido al doctor **CESAR ORLANDO LEÓN TORRES**, Vicepresidente de Operaciones del Banco Agrario de Colombia, en los términos que se plasman a continuación:

“La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popayán, en el fallo de tutela del 29 de noviembre de 2019, en sede de segunda instancia, requirió a esta Delegada para que se hiciera claridad en sobre la respuesta dada al Banco Agrario, en oficio del 06 de agosto de 2019, pues a su juicio se emplearon mal algunos **vocablos** que pudieron tornar contradictorio el texto de dicha respuesta y que de alguna manera tuvieron incidencia en el proceso coactivo que la Tesorería de Guachené, adelanta contra la empresa **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S. y Bancolombia**.

Por ello, en relación con lo solicitado en su oficio No. 0000756 del 26 de julio de 2019, respetuosamente me permito informarle que la Alcaldía Municipal de Guachené dispuso no acceder a la solicitud de suspensión del procedimiento de cobro coactivo solicitada por esta Procuraduría Delegada en auto del 28 de junio de 2019.

Sobre el particular, debo aclararle que conforme a lo previsto en el artículo 160 de la Ley 734 de 2002 y a la Sentencia C-977 de 2002, emitida por la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia alguna para **decretar** la suspensión del procedimiento administrativo, sino



simplemente para **solicitar** tal suspensión, la que, como se informa, no fue acogida por el Alcalde Municipal de Guachené, quien es sujeto investigado en la actuación disciplinaria de la referencia. (*negrilla para vocablos referidos*)

No obstante lo anterior y de cara a su solicitud, le reitero que el Banco Agrario de Colombia S.A. es **gestor fiscal**, toda vez que, además de ser una entidad estatal, su carácter de institución financiera torna evidente su función de manejo y administración de recursos públicos, conforme a lo normado en el artículo 3º de la Ley 610 de 2000.

De la misma manera, la Procuraduría le advierte que conforme a las pruebas que reposan en la actuación disciplinaria, los títulos ejecutivos cuyo cobro coactivo no fue suspendido por el Alcalde Municipal de Guachené, no se encuentran en firme porque fueron objeto de demanda ante el Tribunal Administrativo del Cauca, toda vez que la sociedad quejosa Familia del Pacífico S.A.S. aportó con su denuncia disciplinaria, copia de la documentación correspondiente al proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado bajo el No. 19001-23-33-003-2018-00032-00, en el cual se avizora auto admisorio de la demanda contra la Liquidación Oficial de Aforo No. 025 de 2017 y contra la Resolución No. 036 del 15 de diciembre de 2017, que son los títulos ejecutivos cuyo cobro revisten, al parecer, desconocimiento de las normas procedimentales de carácter tributario y que motivaron el inicio de la investigación disciplinaria de marras.

Por lo anterior, le solicito tener presente el contenido normativo del numeral 4º del artículo 829 y del párrafo del artículo 837 del Estatuto Tributario, que señalan:

“ARTICULO 829. EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:

- 1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.*
- 2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.*
- 3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y*
- 4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.”*

“ARTÍCULO 837. [...]

“Párrafo. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que ésta se encuentra pendiente de fallo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ordenará levantarlas.” (Destacado fuera del texto).



Con relación a ello, le aclaro que estos motivos o circunstancias, desaparecerán cuando la jurisdicción contencioso administrativa decida de fondo sobre la legalidad de los actos administrativos que han sido demandados, pues ella quien debe dirimir la controversia jurídica, con miras a determinar la legalidad o no de los pluricitados actos, y de contera, si es procedente o no el pago de los dineros a favor del municipio de Guachené.

Por todo lo anterior, vale señalar que en estos casos, lo que ley dispone es que los recursos embargados se consignen en un depósito judicial, en el Banco Agrario, a nombre del municipio, pero no en las cuentas del municipio; y en espera de la decisión que se tome por parte de la jurisdicción contencioso administrativa sobre la demanda de la cual fueron objeto los actos administrativos cuestionados.

Respecto de lo anterior, debe resaltarse lo resuelto en el ordinal CUARTO del fallo de tutela del 29 de noviembre de 2019, emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, que señaló:

“CUARTO: Advertir que con esta decisión no se está ordenando el levantamiento de ninguna cautela o la entrega de dinero alguno, pues ello le compete definir a las autoridades correspondientes, luego que se determine el alcance de la actuación que se ordena aquí remediar conforme al ordenamiento jurídico.”

Considera entonces esta Delegada que en consonancia con lo ordenado en el fallo de tutela de segunda instancia, debe ser la jurisdicción contencioso administrativa (Tribunal Administrativo del Cauca y eventualmente el Consejo de Estado) la que resuelva de fondo el problema jurídico planteado, y no se observa la necesidad de urgencia alguna de entregar anticipadamente los dineros embargados al municipio de Guachené, los cuales bien podrían consignarse o trasladarse a un depósito judicial a nombre de municipio, pero en espera (stand by) de la decisión de las autoridades mencionadas.

De otra parte y para su conocimiento, no sobra recordar que dadas las circunstancias fácticas presentadas en el proceso disciplinario, esta Delegada, en auto del 28 de junio de 2019, compulsó copias ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, para que se investiguen las posibles irregularidades en las que pudo haber incurrido el doctor JORGE SANTOS ACOSTA, abogado litigante quien suscribió el contrato de prestación de servicios No. 008 de 2016, con el municipio de Guachené, para la “asesoría” en el cobro y recaudo de impuestos de industria y comercio, entre otros tributos, con cuantía de \$2'000.000.00, pero con cuota Litis del 25% sobre los montos recaudados, lo que a juicio de esta Procuraduría, podría ser vulneratorio de lo previsto en los artículos 1º y 2º de la Ley 1386 del 21 de mayo de 2010.”



Infórmese a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popayán, sobre el cumplimiento de la tutela. Alléguese copia del oficio aclaratorio enviado al Banco Agrario de Colombia.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA

Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial

*IUS 2018-516181
Proy: JMTC/04/12/2019*



**PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y
JUDICIAL**

Bogotá D.C,
Oficio No.

URGENTE

Doctor
IVAN DARIO GÓMEZ LEE
Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa
Procuraduría General de la Nación
Calle 16 No. 4 – 75 Piso 4 Torre C
Bogotá, D.C.

Ref: Expediente No. 2018-516181
(Al contestar favor citar la referencia)

Cordial saludo. En mi calidad de Procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, respetuosamente solicito a usted estudiar la viabilidad de designar un Procurador Judicial que funja como Agente Especial dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del Derecho, radicados bajo los números 19001233300320180003200 acumulado al 19001230000520180024500; y 19001233300220190027300, cursantes en el Tribunal Administrativo del Cauca, iniciados por Familia del Pacífico S.A.S., contra el Municipio de Guachené.

Esta comedida solicitud se funda en que el expediente de la referencia cursa en esta Delegada, siendo quejosos los representantes legales de Familia del Pacífico S.A.S. y de Bancolombia, en contra del Alcalde y la Tesorera del municipio de Guachené, por hechos de los cuales podrían derivarse presuntas irregularidades cuyo sustento jurídico atañe al tema que se debate en los expedientes administrativos referidos y que es de relevancia dada las características del caso.

Agradezco su gentil atención.

Cordialmente,

LILIANA GARCÍA LIZARAZO
Procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial



Dependencia:	Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial
Radicación:	IUS 2019-179996
Implicada:	MAR YURY BANGUERO CHARÁ, ÓLIVER CARABALÍ BANGUERO y JORGE SANTOS ACOSTA
Cargo y Entidad:	Tesorera Municipal de Guachené (Cauca), Alcalde Municipal de Guachené y contratista, respectivamente
Quejosos:	CESAR NEGRET MOSQUERA y ÓSCAR DAVID GÓMEZ PINEDA
Fecha queja:	29 de marzo de 2019
Fecha Hechos:	28 de agosto de 2017 y siguientes
Asunto:	Auto ordena acumular documentos y queja a una Investigación disciplinaria.

Bogotá, D.C., 25 de junio de 2019

I. ASUNTO

Procede el despacho a ordenar la acumulación de documentos y de la presente queja con destino a la investigación disciplinaria No. 2018-516181.

II. HECHOS Y CONSIDERACIONES

El doctor **CÉSAR NEGRET MOSQUERA**, apoderado especial de la sociedad **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S**, instauró queja disciplinaria el 26 de marzo de 2019, en contra de los servidores públicos **OLIVER CARABALÍ BANGUERO**, Alcalde Municipal de Guachené y **MAR YURY BANGUERO CHARÁ**, Tesorera del mismo municipio, y en la que solicitó se investigaran presuntas irregularidades relacionadas con la expedición de actos administrativos, puntualmente, la Liquidación Oficial de Aforo No. 025 del 28 de agosto de 2017, tendiente al cobro de impuestos, sanciones e intereses; y la Resolución No. 055 del 25 de mayo de 2018, mediante la cual se ordenó un embargo por la suma de \$42.000.000.000.00., en ejercicio del cobro coactivo, afectando con ello al parecer de manera irregular el patrimonio de la sociedad que el quejoso representa.

El quejoso indicó que igualmente en auto de trámite No. 001 del 1° de marzo de 2019, la Tesorera **MAR YURY BANGUERO**, ordenó que los recursos embargados fueran transferidos a la cuenta bancaria del municipio de Guachené, contrariando con ello lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 837 -1 del Estatuto Tributario.

De otra parte, fueron radicados sendos memoriales en la Procuraduría General de la Nación, suscritos por los doctores **CESAR NEGRET MOSQUERA**, apoderado especial de la sociedad **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S**. y **ÓSCAR DAVID GÓMEZ PINEDA**, apoderado especial de **BANCOLOMBIA S.A.**. En el



primero, recibido el 08 de abril de 2019, el doctor **NEGRET MOSQUERA** complementa la queja inicial; mientras que en el segundo libelo, radicado el 24 de mayo de 2019, el doctor **GÓMEZ PINEDA** hace alusión a los mismos hechos señalados por el primer memorialista, pero expresa que a ello se sumó un proceso sancionatorio contra **BANCOLOMBIA** por no enviar información y que dentro del proceso de cobro coactivo contra **FAMILIA DEL PACÍFICO**, fue vinculado solidariamente **BANCOLOMBIA S.A.**, se le vulneraron los derechos de defensa, contradicción y debido proceso, además de haberle cobrado irregularmente un valor por concepto de agencias en derecho.

También, el 05 de abril de 2019, fue radicado otro escrito signado por el doctor **CÉSAR NEGRET MOSQUERA**, en el cual colocó hechos sobrevinientes relacionados con los sucesos anteriormente descritos y a los que se refirió en su queja inicial.

Sobre el asunto debe tenerse en cuenta que el señor Procurador General de la Nación dispuso mediante Resolución No. 455 del 14 de abril de 2019 la asignación especial de la presente queja a esta Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial; e idéntico procedimiento realizó a través de la Resolución No. 584 del 17 de junio de 2019, con la que asignó el expediente No. **IUS E-2018-516181**, el cual trata de los mismos hechos anotados en este auto, en virtud de queja disciplinaria que instauró el señor **ANDRÉS FELIPE GÓMEZ SALAZAR**, Gerente General de la sociedad **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.**, proceso que se adelanta contra **MAR YURY BANGUERO CHARÁ**.

En ese orden de ideas, al ser evidente que tanto los escritos mencionados como la presente queja coinciden en señalar, entre otros, a la señora **MAR YURY BANGUERO CHARÁ**, como presunta responsable de los hechos; y a ello se adiciona que dichos sucesos son idénticos a los que constituyen materia de indagación en el proceso radicado No. **IUS E-2018-516181**, estructurándose entonces circunstancias comunes o factores de conexidad, lo procedente es acumular tales foliaturas a dicho expediente, máxime si se tiene en cuenta que el mismo inició con anterioridad y actualmente se encuentra en investigación disciplinaria.

Por ende, todos los documentos allegados a la Procuraduría General de la Nación, que conciernan al tema descrito, incluida la presente queja, se acumularán y se llevarán bajo una misma cuerda procesal con el radicado **IUS E-2018-516181**.

En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, en uso de sus facultades legales,

IV. RESUELVE

PRIMERO: ACUMULAR la presente queja, radicada con el No. **IUS E-2019-179996**, a la investigación disciplinaria No. **IUS E-2018-516181**, seguida contra **MAR YURY BANGUERO CHARÁ**, de conformidad con lo analizado y dispuesto en la parte motiva de este proveído.



SEGUNDO: ACUMULAR los escritos firmados por los doctores **CESAR NEGRET MOSQUERA**, apoderado especial de la sociedad **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** y **ÓSCAR DAVID GÓMEZ PINEDA**, apoderado especial de **BANCOLOMBIA S.A.**, radicados el 05 y 08 de abril de 2019 y el 24 de mayo de 2019, respectivamente, a la investigación disciplinaria No. **IUS E-2018-516181**, seguida contra **MAR YURY BANGUERO CHARÁ**, acorde con lo motivado y ordenado en la parte considerativa del presente auto.

TERCERO: Por Secretaría de esta Delegada, infórmese de esta decisión a los doctores **CESAR NEGRET MOSQUERA**, apoderado especial de la sociedad **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** y **ÓSCAR DAVID GÓMEZ PINEDA**, apoderado especial de **BANCOLOMBIA S.A.** En igual sentido se comunicará a la señora **MAR YURY BANGUERO CHARÁ**.

CUARTO: Registrar en el SIM, la presente decisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Original firmado por
GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA
Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial

*IUS 2019-179996
Proy: JMTC/21/06/2019*



Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Policía Judicial

Radicación:	IUS 2018-516181
Implicados:	OLIVER CARABALI BANGUERO Y MAR YURY BANGUERO CHARÁ
Cargo y Entidad:	Alcalde y Tesorera Municipal de Guachené (Cauca)
Quejoso:	ANDRÉS FELIPE GÓMEZ SALAZAR
Fecha queja:	18 de julio de 2018
Fecha Hechos:	28 de agosto de 2017 y siguientes
Estado del Proceso:	Investigación Disciplinaria

ANTECEDENTES

Los apoderados del Grupo **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.**, y **BANCOLOMBIA S.A.** instauraron quejas disciplinarias en contra del Alcalde del Municipio de Guachené, Cauca, el señor **OLIVER CARABALI BANGUERO**, y la tesorera municipal, **MAR YURY BANGUERO CHARÁ** por presuntas irregularidades en el proceso de cobro coactivo adelantado por la administración contra las empresas referidas, al emitir liquidaciones de aforo y acumulación de sanciones e intereses correspondientes, por la falta de presentación y el no pago en las retenciones del impuesto de industria y comercio, atinentes a las vigencias comprendidas entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de enero de 2017.

Las quejas presentadas se fundamentan en que los funcionarios al parecer, desconocieron el marco jurídico que regula el proceso de jurisdicción coactiva y emitieron actos administrativos dentro del proceso tributario contra Familia del Pacífico S.A.S., pese a haberse interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento contra los títulos ejecutivos en que se basa el cobro por medio de acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de la Resolución No. 025 de 2017 y la 036 de 15 de diciembre de la misma anualidad, que confirmó de manera parcial la primera, todo ello al punto decretar medida preventiva de embargo por cuantía de cuarenta y dos mil millones de pesos (\$42.000.000.000) en los términos del artículo 837 del Estatuto Tributario.

El grupo **FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S.** presentó excepciones al mandamiento de pago, entre ellas la del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario: *“la interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”*

Con fundamento en la queja inicial y la documentación anexa, aportada por el quejoso, la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, dispuso la apertura de investigación disciplinaria en **auto del 14 de diciembre de 2018**, contra **MAR YURY BANGUERO CHARÁ**, Tesorera Municipal de Guachené, por las presuntas irregularidades que se señalaron en la queja.

Mediante Resolución No. 584 del 17 de junio de 2019, el Procurador General de la Nación resolvió *“reasignar la competencia dentro del radicado”* **IUS E-2018-516181 / IUC D-2018-1195843** a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, y con Resolución No. 606 del 25 de junio de 2019 adicionó la precitada decisión y delegó en él la facultad de tomar las medidas preventivas contempladas en el artículo 160 de la Ley 734 de 2002.

Con auto del 25 de junio de 2019, proferido dentro de la queja No. IUS E-2019-179996, se dispuso acumular a este proceso, tanto la referida queja como otros documentos o memoriales, todos atinentes a los mismos hechos por los cuales se adelanta investigación disciplinaria, con la circunstancia adicional de que en esas foliaturas, además de la señora **MAR YURY BANGUERO**, se señala también como posibles autores de faltas disciplinarias al Alcalde municipal de Guachené, señor **OLIVER CARABALI BANGUERO** y al abogado **JORGE SANTOS ACOSTA**, quien suscribió contrato de prestación de servicios No. 008 de 2016, con el municipio de Guachené, para el cobro y recaudo de impuestos de industria y comercio, y predial entre otros.



Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Policía Judicial

Por medio del auto de fecha 28 de junio de 2019, se adicionó el auto de Apertura de Investigación Disciplinaria para vincular al alcalde municipal, compulsar copias ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca para investigar al doctor Jorge Santos Acosta y solicitar la suspensión de los actos administrativos en aplicación del artículo 160 de la Ley 734 de 2002, medida que no fue de recibo por la administración municipal de Guachené, la cual continuó con el trámite del proceso coactivo.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial ofició en dos oportunidades al Banco Agrario, entre otras cosas, dando respuesta a las solicitudes de esa entidad, para aclararle que la Procuraduría no tiene facultades para suspender actos administrativos sino para “solicitar” la suspensión de los mismos y que en su calidad de gestor fiscal, era responsabilidad del banco, decidir sobre la solicitud del municipio de Guachené respecto del giro de los dineros embargados a Familia del Pacífico.

Igualmente, se les hizo saber que el fondo de la litis debía resolverse en la jurisdicción contencioso administrativa, atendiendo las demandas cursantes en el Tribunal Administrativo del Cauca, interpuestas por los apoderados de las entidades afectadas con las decisiones de la Alcaldía de Guachené.

Esto claramente implica que la Procuraduría mal haría en llegar primero a decisiones de fondo que eventualmente pudieran ser contrarias a las tomadas por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello, se ha desarrollado el proceso, teniendo en cuenta el curso de las acciones en el Tribunal Administrativo del Cauca.

En tal virtud, habiendo tenido conocimiento de la existencia de la decisión que suspendió los actos administrativos de la Alcaldía de Guachené, y de la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del proceso de cobro coactivo, se ordenó oficiar al referido Tribunal para que allegara a esta Delegada, copia auténtica de esas providencias, justamente con el fin de analizar nuevamente el expediente con miras a la toma de decisiones de fondo. El envío de la solicitud se encuentra en trámite que se suspendió por la situación de emergencia surgida en torno al tema de sanidad pública por coronavirus, ampliamente conocido.

Cabe anotar que la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, fue apelada y ello coloca nuevamente en suspenso la resolución del conflicto presentado, cuyo fondo puntual atañe al tema tributario y administrativo.

Adjunto en el mensaje de correo, se anexan todos los documentos emitidos por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, en desarrollo de la gestión procesal del expediente No. IUS E-2018-516181, en ocho (8) archivos, además del presente.